

Gordoa, Soledad Olvera, Onofre Romero, Joaquina Rodriguez, Martin Quintana, Dolores Romero, Dolores Diaz, Margarita Segura, Micaela Moreno, Ignacia Montiel, Josefa Oliva, Tomás Calvillo, Luisa Andújar, Teófila Ranjel, Guadalupe Espinosa, María de Jesus Herrera, María Lugarda, Jesus Escobar, Soledad Nava, María Mendoza y Miguel Espinosa, contra la orden del Gobernador del Distrito que al hacer efectivo un acuerdo de la corporacion municipal que mandaba trasladar el mercado del Baratillo, establecido en las plazuelas de Montero y el Jardin, al mercado de Guerrero, ha impedido el libre acceso del público á dichas plazuelas donde tienen establecidos sus bazares las peticionarias, alegando que con este hecho se violan las garantías consignadas en los artículos 4º, 5º y 16 de la Constitucion de 57. Vistas las constancias de autos y considerando: que aunque el Ayuntamiento de la capital tiene el derecho de establecer mercados y el gobierno del Distrito el deber impuesto por las leyes de prestar el auxilio de la fuerza para hacer efectivas sus disposiciones, en el presente caso, al cumplir con un acuerdo del Ayuntamiento de la capital que mandó trasladar la plaza del Baratillo establecido en las plazuelas del Jardin y de Montero al mercado de Guerrero; al hacer efectiva esta disposicion ha impedido el libre acceso del público á las casas-bazares de las peticionarias, impidiendo el libre ejercicio de su comercio con violacion expresa del art. 4º del Pacto Federal de la República, con tales fundamentos se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juzgado 1º de Distrito de esta capital, que negó el amparo á las quejas, y se declara que: la Justicia de la Union ampara y protege á las promoventes contra los actos abusivos de la policia, que al ejecutar la orden del Gobernador del Distrito, ha-

Tomo III.—Parte .II

ciendo efectivo el acuerdo de la Corporacion municipal, sobre la traslacion del Baratillo al mercado de Guerrero, ha impedido al público el libre acceso á los bazares de las quejas, y ha impedido á estas el libre ejercicio de su comercio, con violacion del art. 4º de la Constitucion de 1857.

Devuélvansese sus actuaciones con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por mayoría de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Artega.—M. Anza.—Ignacio Ramirez.—J. María del Castillo Velasco.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias que certifico.—México, Julio 8 de 1872.—Lic. Agustin Peralta, oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido por el C. Lic. Ignacio Durán en representación de D. José Elías Fagoaga, contra una providencia del Administrador de rentas de Actopan, en virtud de la cual se le cobra una multa de \$9231 12.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que por no haberse violado, en la persona del Sr. D. José Elías Fagoaga, las garantías que dice le aseguran los artículos 21 y 22 de la Constitucion General de la República, el Juzgado se ha de servir denegar el amparo, que se solicitó en 3 de Mayo último, por proceder así de justi-

cia segun las razones que se van á exponer.

De las pruebas que se han rendido por ambas partes se deduce: 1º que al C. José Elías Fagoaga, como acreedor de la testamentaria de D. Pedro Romero de Terreros, se le adjudicaron en pago por el Juzgado 1º de Distrito de México, las Haciendas de Chicabasco y Tepenené en la cantidad de ciento veintinueve mil trescientos setenta y cuatro pesos, sesenta y seis centavos. 2º, Que en 13 de Diciembre de 69 se recibió de dichas fincas haciéndose entrega formal al C. Rafael Peña, actual Administrador. 3º Que en 6 de Octubre de 70, es decir, cuando estaba para cumplirse un año de la fecha de la adjudicacion á la del denunció, el C. Francisco Flores Hernandez se presentó ante el C. Administrador de Rentas del Distrito de Actopan diciéndo, que por haberse incurrido en la pena de que habla el art. 12 de la ley de 31 de Mayo de 51, se le tuviera como parte. 4º Que en 24 de Octubre de 1870 á mocion de Fagoaga, se acordó por el C. Gobernador del Estado que se reservara el expediente hasta que la Administracion de Rentas de Actopan recibiera del Juzgado de Distrito de México el informe que se le tenia pedido. 5º Que en 29 de Junio del año próximo pasado recayó sobre el mismo asunto otro acuerdo del Gobierno, ordenando que por estar suficientemente comprobado que el Sr. Fagoaga habia incurrido en la pena que señala el art. 12 del decreto núm. 25 de 27 de Mayo de 51 por la traslacion de dominio de las Haciendas de Chicabasco y Tepenené, la Administracion de Actopan procediera desde luego á hacer efectivo el pago de treinta y dos mil cuatrocientos diez y siete pesos, treinta y cinco centavos. 6º Que en 22 de Julio próximo pasado se volvió á determinar por el mismo Gobierno local se recibiera por la Seccion 3ª de la Secreta-

ría de Hacienda la suma de tres mil setecientos setenta y seis pesos setenta y ocho centavos como entero á buena cuenta de la alcabala de traslacion de dominio, sin que por eso se alterasen de modo alguno los derechos de la Hacienda Pública ni los del denunciante, fojas 16 del cuaderno de prueba.

Como se vé, el C. Elías Fagoaga en el trascurso de casi un año, no dió parte á la Administracion de Actopan del contrato de adjudicacion hecho á su favor, por la razon segun él, de que no habiéndose verificado la liquidacion tampoco pudo presentar las constancias con la oportunidad debida. Esta es la razon fundamental en que apoya el apoderado del C. Fagoaga su escrito peticionario, y como por consecuencia, queriendo decir que aún no se ha consumado el contrato, pide que se declare no haberse incurrido en la pena; pero contra esa aseveracion existen los diversos trámites que se han estado dando al presente negocio, pues desde que fué denunciado el fraude, se concedió al interesado la gracia de que ocurriera á la H. Legislatura para que si ella lo tenia á bien, perdonase la pena, la que por otra parte no habiéndose condonado, habrá que exigirse como se exige la parte que le corresponde al denunciante y al Fisco Federal.

Estando como está vigente la ley de 31 de Mayo de 1851 y habiendo incurrido el C. José Elías Fagoaga en la pena que está señalada por el art. 12, es hasta temerario decir que se han violado los arts. 21 y 22 de la Constitucion Federal que se refieren á las multas ó penas que se imponen judicial ó gubernativamente á los delincuentes, de manera, que lo que se cobra al solicitante no es nuevo sino fundado en la práctica diaria, ni hace al caso que se haya dejado de hacer la liquidacion, supuesto que el contenido del art. 111 sobre Instruccion de alcabala, dice: "Todo lo que se

entregue al acreedor judicial ó extrajudicialmente en pago de alguna deuda, por ser esta entrega verdadera, real y efectiva venta, está sujeto á la contribucion de la alcabala, y de todas las ventas debe de exigirse aunque no se formalice instrumento público.”

Las razones que se acaban de exponer convencerán el ánimo del Juzgado sobre la improcedencia del recurso interpuesto por el C. Lic. Ignacio Durán y la justicia que asiste á la parte ejecutora, á la que debe dejarse libre y expedita su accion.

Por tanto, el suscrito Promotor concluye pidiendo que la justicia de la Union no ampare ni proteja al C. José Elías Fagoaga.—Pachuca, Junio 17 de 1872.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Junio 26 de 1872.—*F. Briseño.*

#### SENTENCIA del C. Juez.

Pachuca, Junio 22 de 1870.—Vistos estos autos promovidos por el C. Lic. Ignacio Durán en representacion de D. José Elías Fagoaga, pidiendo amparo y proteccion contra una providencia del Administrador de Rentas de Actopan, en virtud de la cual se le cobra, con la facultad económico-coactiva, una multa de \$9231 19 cs. para aplicarla al C. Francisco Flores Hernandez, como denunciante de una defraudacion del derecho de traslacion de dominio. Vistas las pruebas que obran en el cuaderno respectivo, de las que resulta: 1º que el 3 de Diciembre de 1869 se adjudicaron en pago al C. Fagoaga, por el Juzgado de Distrito de México, las haciendas de Chicabasco y Tepeniené, en la cantidad de \$129,374 66 cs. menos el valor de las tierras y llanos enajenados con posterioridad al avalúo, y cuyo valor, segun los datos ministrados por aquella oficina es de \$3.482. 2º Que á fines del mis-

mo año de 1869, tomó el C. Fagoaga posesion de las haciendas adjudicadas, otorgándose la escritura correspondiente en 18 de Enero inmediato (fs. 10, 12. vta. 13 y siguientes.) 3º Que en esa época se cobraba en el Estado por toda traslacion de dominio el 3 p<sup>o</sup> del valor de la propiedad, (art. 3 de la ley de 25 de Abril de 1868) y en caso de defraudacion un 25 p<sup>o</sup>, es decir derechos *octuplos* que equivalen al impuesto sencillo y á una multa de *mas de siete veces el valor de aquel* (art. 12 del decreto de 21 de Mayo de 1851). 4º Que á consecuencia de haberse denunciado esta traslacion de dominio por el C. Flores Hernandez, nueve meses despues de verificada, la Administracion de Rentas de Actopan, requirió del C. José Elías Fagoaga el pago de \$32.417 28 cs. como resultado de la siguiente liquidacion:

Valor aparente de las fincas adjudicadas.....	\$129.374 66
Valor de los terrenos y llanos desmembrados.	„ 3.482 00
Valor efectivo de la adjudicacion sobre el cual recae el impuesto.....	\$125.892 66
Veinticinco p <sup>o</sup> de esta cantidad.....	\$ 31.473 16
Veinticinco por ciento adicional sobre el valor sencillo de la alcabala que á razon del 3 p <sup>o</sup> es de \$3.776 78	944 12
Total.	\$ 32.417 28

En cuya cantidad se comprende la de \$9.231 12 cs. que es la tercera parte de la de \$27.696 38 cs. valor líquido de la multa, *siguiendo en todos los cálculos* de la Secretaría de Hacienda del Estado, (fs. 16 vta.) 5º Que en 22 de Julio de 1871 el C. Gobernador Antonino Tagle exigió y recibió el valor sencillo de la alcabala, interin se liqui-

daba su importe total, en vista de la *resolucion superior* que el interesado obtuviera, ó de los Tribunales, ó de la Legislatura, difiriendo el cobro de la Contribucion Federal para cuando se supiera el monto total del impuesto (fs. 18,) aconsejando al causante que ocurriera al Congreso, para la aclaracion de la ley de 31 de Mayo de 1851, que imponia la multa que se le cobraba, ó para que se le condonase la pena, (fs. 7) y dirigiéndose casi al propio tiempo á la expresada Asamblea (fs. 4 y siguientes) pidiendo por su parte la aclaracion de dicha ley por creeria contraria al art. 22 del Código fundamental, en la parte en que imponia una multa excesiva ó pena trascendental, á la defraudacion de la alcabala. 6º Que en 9 de Febrero de este año, el C. Gobernador Francisco de A. Osorio, (fs. 18 vta.) separando los derechos del fisco de los del denunciante, y sin esperar la aclaracion que se habia pedido de la citada ley de 31 de Mayo, mandó al Administrador de Rentas de Actopan, que con la potestad coactiva exigiera de Fagoaga, inmediatamente, el pago de la parte correspondiente al C. Flores, y dentro de un mes lo relativo á la Hacienda pública. 7º Que habiendo reclamado el quejoso contra este acuerdo por haberse dictado sin esperar la resolucion del Congreso, se le concedió por el mismo Gobierno, con fecha 15 de Marzo último, (fs. 22) un plazo de seis meses para *ocurrir á la Legislatura, (que hasta hoy no se reúne), con el fin de obtener la condonacion de la pena ó la declaracion de no haber incurrido en ella,* por lo que pertenece á la Hacienda pública; mas respecto de la parte del denunciante, se ordenó al Administrador de Rentas que usara de la facultad coactiva para cobrarla, y 8º Que en 25 de Abril se repitió la misma orden al Administrador citado, quien á su vez dictó la providencia que motivó el presente recurso.

Visto por último, el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal y los alegatos respectivos; y considerando:

Que aunque el Administrador de Rentas, el Promotor fiscal y el apoderado del quejoso, han dedicado una gran parte de sus alegatos, discutiendo si en el caso que nos ocupa, se consumó ó no la traslacion de dominio, si el juicio es cierto ó incierto, líquido ó ilíquido, en una palabra, si el impuesto se ha ó no causado y si se ha incurrido ó no en la pena de la ley, tal cuestion pertenece exclusivamente al juicio contencioso de Hacienda, y no al presente en el que solo debe examinarse la constitucionalidad de alguna ley, ó de los actos de cualquiera autoridad.

Que aunque se pretende por el actor que la orden del Gobierno mandando hacer efectiva una multa establecida por una ley preexistente importa la aplicacion de una pena propiamente dicha y la violacion de la garantía otorgada por el artículo 21 Constitucional, tal razonamiento es inadmisibile, porque las providencias de esta clase no tienen otro objeto que asegurar precautoria y provisionalmente los intereses del Fisco, reservándose á los tribunales competentes la aplicacion definitiva de la pena ó la declaracion de no haber incurrido en ella.

Que las únicas cuestiones constitucionales que en el presente recurso merecen examinarse y resolverse, se reducen: á si la multa impuesta por el artículo 12 de la ley de 31 de Mayo de 1851 es ó no excesiva, y si compete al Administrador de Rentas de Actopan, el ejercicio de la facultad coactiva, para cobrar la parte de dicha multa que corresponde al denunciante, *estando pendiente en la Legislatura, la resolucion de si debe ó no considerarse vigente la referida ley,* por parecer contraria al art. 22 del código fundamental.

Considerando respecto del primer punto: 1º Que aunque no está reglamentado todavía el citado artículo 22, ni hay ley alguna que determine qué multas deben tenerse por excesivas, los Tribunales federales tienen que resolver sobre el cumplimiento y aplicación de aquel precepto fundamental, si no ha de ser letra muerta ni una quimera, la garantía que otorga: 2º Que, si se reflexiona que las penas deben ser proporcionadas á los delitos, que no hay mas regla para graduar esta proporción que la justicia universal y la conciencia humana (Pacheco, der. pen. fed. XIV) manifestada por la opinion pública; que ésta debe buscarse principalmente en los escritos de los autores y en el espíritu mismo de la legislación vigente para delitos de la propia naturaleza; que no solo no existe ningún escritor moderno que asigne la pena de derechos *octuplos* á la defraudación de la alcabala que causa la venta de bienes raíces, sino que algunos por el contrario, refieren que la opinion pública está ya declarada en contra de los derechos *quintuplos* y demas señalados á los delitos de defraudación (Escribano, de leg. arts. "Contrabando" y "Defraudación"); que la legislación de hacienda vigente en el Estado, ha derogado las leyes antiguas, por el rigor excesivo de sus penas, imponiendo solo á los defraudadores de las rentas públicas, la de pagar derechos dobles; que reflexionando, pues, en cuanto se ha dicho, es inconcuso que la multa impuesta por el artículo 12 de la mencionada ley de 31 de Mayo es excesiva. 3º Que si la confiscación se verifica, no solo en todos los bienes de un individuo, sino en su mayor parte (Sala, ilustrac. al derecho lib. II. tit. XXX. parr. 19. Gutierrez Prac. crim. discurso sobre los delitos y penas, cap. 6 parr. 101) es evidente que serán multas excesivas las que comprenden la mitad de los bienes, ó una parte con-

siderable de ellos, como lo es sin duda la de \$27.696 38 cs. que se cobra al C. José Elías Fagoaga.

Considerando, respecto del segundo punto: 1º Que ninguna providencia coactiva tiene lugar, cuando los derechos del Fisco no son *claros é indudables*, lo que sucede especialmente, cuando por razon de la *cuota* que se cobra, ó por la *variación del tiempo y otras circunstancias*, se duda con fundamento de la aplicación de la ley al caso particular, artículos 2º y 3º de la ley de 20 de Enero de 1867, Ejecutoria de la Suprema Corte de 11 de Marzo de 1871; 2º Que por las razones expuestas hasta aquí, y principalmente por el hecho de haber consultado tanto el Gobierno Constitucional del O. Tagle, como el de su sucesor, á la Legislatura del Estado, la aclaración de la citada ley de 31 de Mayo que estableció la multa que se cobra, es bien fundada la duda de la aplicación de dicha ley al caso de Fagoaga; 3º Que si la potestad coactiva no procede cuando son dudosos los derechos del Fisco, menos puede ejercitarse cuando notoriamente no tiene ningunos como no los tiene indudablemente el Administrador de Rentas de Actopan, para cobrar en favor del O. Flores, *parte* de la multa impuesta por la ley de 31 de Mayo, *estando pendiente en la Legislatura, la resolución de si se debe ó no pagar toda ella*; 4º Que aunque el O. Gobernador alega que los derechos del denunciante, que el Fisco debe hacerle efectivos, no están comprendidos en la aclaración pedida, porque, cualquiera que ésta sea, no puede modificar aquellos sino es dándole efecto retroactivo, tal razonamiento es inadmisibile, porque la resolución que se solicita, no tiene mas objeto que *restituir todo su vigor* al artículo 22 de la Constitución, muy anterior sin duda al hecho que causa la multa en cuestión y *restablecer derechos* que jamas han podido ser desconocidos, sin violar la garantía que otorga aquel pre-



cepto, en cuyos casos no hay retroactividad, (Escrib. dic. de leg. artículo "Efecto retroactivo".) 5º; Que en consecuencia, el Administrador de Rentas de Actopan, ha extralimitado sus facultades, cobrando con la potestad coactiva al C. Fagoaga, la suma de \$ 9.231 12 cs., violando con este procedimiento la garantía que otorga el artículo 16 del Código fundamental, según el que "nadie puede ser molestado en sus posesiones sin causa legal."

Considerando además: que la contribución Federal causada por el entero ya hecho de la cantidad de \$ 3.776 78 es. que importa el impuesto sencillo contra el cual no se reclama, no está comprendido en la solicitud del quejoso que se refiere exclusivamente á la multa.

Que á fojas 9 y 18 vuelta del cuaderno de pruebas, aparecen dos ocursos en papel del sello 5º presentados, uno al C. Administrador de Rentas de Actopan, y otro al C. Gobernador del Estado, sin que ninguna de estas autoridades, ni el C. Antonino Tagle en su caso, hubieran reclamado las infracciones de la ley del papel sellado. Con fundamento de lo expuesto y de los artículos 101 y 102 de la Constitución General, se decreta: 1º Que la justicia de la Unión ampara y protege al C. José Elías Fagoaga contra la orden del Administrador de Rentas de Actopan, por la que se le cobra en favor del C. Flores Hernandez la suma de \$ 9.231 12 cs. como parte de la multa establecida por el artículo 12 de la ley de 31 de Mayo de 1851, por importar aquella providencia la violación de las garantías que otorgan los artículos 16 y 22 de la Constitución. 2º Que se libre oficio al C. Gefe de Hacienda con las inserciones necesarias, para que proceda desde luego al cobro de la cantidad de \$ 994 14 cs. correspondiente á la contribución Federal, cuyo cobro difirió indebidamente el C. Antonino Tagle, y 3º que con las constancias necesarias se li-

bre oficio al Administrador Principal de Rentas de este Estado, para que haga efectivas las penas en que respectivamente hayan incurrido los CC. Administrador de Rentas de Actopan, Gobernador Constitucional Antonino Tagle y su sucesor por infracciones á la ley sobre papel sellado. Hágase saber, publíquese, sáquense las copias correspondientes para el "Semanario" y remítanse estos autos á la Suprema Corte para la revisión de esta sentencia que definitivamente juzgando pronunció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejía—Francisco Briseño.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Pachuca, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y dos.—*F. Briseño.*

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 2 de 1872.—Visto el juicio de amparo seguido por el juez de Distrito del Estado de Hidalgo á instancia del Lic. D. Ignacio Durán, en representación de D. José Elías Fagoaga, contra la Orden del Administrador de rentas de Actopan que previene al de las haciendas de Chicabasco y Tepenené, de la propiedad de Fagoaga, que pague la suma de diez mil ciento setenta y cinco pesos veintiseis centavos (\$10,175 26 cs.) importe de novecientos cuarenta y cuatro pesos catorce centavos (\$944 14 cs.) por el veinticinco por ciento adicional computado sobre la cantidad de tres mil setecientos setenta y seis pesos setenta y ocho centavos, (\$3,776 78 es.) ya enterados por el impuesto de la traslación de dominio de las expresadas fincas, y del tanto por ciento concedido al denunciante del crédito referido y del recargo del octuplo de su importe, causado por no haberse satisfecho en tiempo oportuno el tres por ciento por

la traslacion de dominio: Visto el informe rendido por el Administrador de Rentas; lo alegado por el quejoso y la sentencia del juez de Distrito que lo ampara. Considerando: que á causa de no estar conforme el Sr. Fagoaga, como lo ha manifestado y por las razones que expresa, con la liquidacion que se le hace y en virtud de la cual se le exige el pago, únicamente á la Justicia del Estado corresponde decidir sobre la validez de las excepciones opuestas por el presunto deudor y hacer, en consecuencia, la declaracion que corresponda. Considerando: que el ejercicio de la facultad económico-coactiva se da por las leyes en favor de la Hacienda pública y no en favor de intereses meramente privados, lo contrario de lo cual sucede en el presente caso. Considerando: que si el recargo del octuplo del valor del impuesto que se causara para la traslacion de dominio se considera solamente como una multa, esta seria á todas luces excesiva y por tanto contraria á lo prevenido en el art. 22 de la Constitucion federal, y que si el recargo referido se considera como verdadera pena, no á la autoridad administrativa, sino á la judicial exclusivamente corresponde imponerla, conforme á lo prevenido en el art. 21 de la misma Constitucion: que en uno y otro caso, exigiendo al Sr. Fagoaga el pago de la suma antes referida, se comete una violacion de las garantías constitucionales expresadas en los artículos citados, se resuelve: Se confirma la sentencia del juez de Distrito del Estado de Hidalgo, que declara que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano José Elías Fagoaga, contra la orden del Administrador de rentas de Acapulco, por la que se cobra en favor del C. Flores Hernandez la suma de nueve mil doscientos treinta y un pesos doce centavos (\$9,231 12 cs.) como parte de la multa establecida por el art. 12 de la ley de 31 de Mayo de 1851, por importar aquella providencia la violacion de

las garantías que otorgan los artículos 16 y 22 de la Constitucion.

Devuélvase las actuaciones al juez de Distrito del Estado de Hidalgo, con testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Señores Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—S. Lerdo de Tejada. — Pedro Ogazon. — Juan J. de la Garza. — José Arteaga. — Ignacio Ramírez. — J. M. del Castillo Velasco. — M. Auza. — S. Guzman. — Luis Velazquez. — M. Zavala. — José García Ramírez. — Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 8 de 1872.—Lic. Agustin Peralta, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por Doña Florentina Castañeda de Ibelles, en representacion de su hijo Pedro, contra el C. Gobernador del Distrito que consignó á Ibelles al servicio de las armas.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

##### C. Juez de Distrito:

El promotor que suscribe, en el juicio de amparo promovido por Doña Florentina Castañeda, á favor de su menor hijo Pedro Ibelles, contra la determinacion del C. Gobernador del Distrito que lo destinó al servicio militar en el cuerpo de Gendarmes del mismo, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma que corresponde, dice: que la justificacion de vd. se ha de servir declarar en su fallo, que el amparo es de otorgarse en el presente caso, en vista de las pruebas rendidas por la que-